

Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ
Presidente
CONSEJO DE ESTADO
E. S. D.

Referencia: Medio de Control de Nulidad Electoral
Demandante: José Roberto Acosta Ramos; Camilo Alberto Enciso Vanegas; Leon Valencia Agudelo
Demandado: Acto de nombramiento de Alexander Vega Rocha como Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 2019-2023.
Acto demandado: Acuerdo 025 de Octubre 13 de 2019 de nombramiento. Demás acuerdos de confirmación y/o posesión relacionados con el proceso de selección, nombramiento y posesión de Alexander Vega Rocha como Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 2019-2023

JOSE ROBERTO ACOSTA, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con C.C. No 79.487.813 y tarjeta profesional No. 70.177 del Consejo Superior de la Judicatura, y **CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS**, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con C.C. No. 80.086.658 y tarjeta profesional No. 152.271 del Consejo Superior de la Judicatura y **LEÓN VALENCIA AGUDELO**, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la C.C. No. 71.589.999, presentamos demanda a través del **MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL**, contra los actos administrativos de nombramiento y confirmación del Señor **ALEXANDER VEGA ROCHA**, como Registrador Nacional del Estado Civil, para el periodo 2019-2023.

1. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en los argumentos que se presentan en esta demanda (la “Demanda”), le solicito al honorable Consejo de Estado:

- 1.1. Declarar la nulidad de los actos administrativos, contenidos en los acuerdos (i) 025 de Octubre 13 de 2019 y (ii) Conjuntamente todos los Acuerdos relacionados con el nombramiento, confirmación y posesión del Señor Alexander Vega Rocha, proferidos por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado (conjuntamente los “Presidentes de las Altas Cortes”), por medio de los cuales se realizó el nombramiento y confirmación, respectivamente, de Alexander Vega Rocha como nuevo Registrador Nacional del Estado Civil, ya que fueron proferidos en clara violación a las siguientes normas:

Violación	Normas vulneradas
Violación al principio de publicidad	<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 209 de la Constitución Política de 1991. • Artículo 2 de la Ley 1134 de 2007. • Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014. • Artículo 27 del Acuerdo 002 de 2019. • Reglas jurisprudenciales sobre la prueba de entrevista
Violación al principio de participación ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • Preámbulo, artículo 1 y 2 de la Constitución Política de 1991. • Artículos 60 y 64 de la Ley 1757 de 2015.
Violación a las reglas procedimentales de evaluación de la entrevista	<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 14 del Acuerdo 004 de 2019.

1.2. En consecuencia, ordenar a los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado:

1.2.1. Repetir la Fase de Entrevista de los aspirantes, respetando los principios legales vulnerados; o en subsidio,

1.2.2. Abrir un nuevo concurso de méritos y encargar a otra persona como Registrador, mientras el nuevo concurso se lleva a cabo.

2. HECHOS Y OMISIONES QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES

I. Reglamentación del procedimiento de elección

2.1. El día 25 de junio de 2019, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado emitieron el Acuerdo 004 de 2019, por medio del cual convocaron a concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil (en adelante “el Registrador”).

2.2. Anteriormente, el procedimiento de elección del Registrador se encontraba regulado por el Acuerdo 001 de 2007 (el “Acuerdo Original”). Sin embargo, mediante Acuerdos 001 de 2019, 002 de 2019¹, 003 de 2019², 004 y 005 de 2019³ (los Acuerdos Reformatorios), los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado modificaron el Acuerdo Original.

1 De 20 de junio de 2019.

2 De 25 de junio de 2019.

3 De 25 de junio de 2019.

Entre otros aspectos destacados en la parte motiva de los Acuerdos Reformativos, los Acuerdos 002 y 004 de 2019, expusieron la necesidad de aplicar los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección del Registrador, en consonancia con el Inciso 4 del Artículo 126 de la Constitución Política.

- 2.3.** Como resultado de la adopción de los Acuerdos Reformativos, los Presidentes de las Altas Cortes debían realizar la elección del nuevo Registrador Nacional del Estado Civil con base en la sumatoria de los siguientes cuatro factores: (i) Conocimiento (25%), (ii) Competencia (25%), (iii) Hoja de Vida (20%), y (iv) Entrevista (30%), los cuales serían evaluados a lo largo de tres etapas, tal como se ilustra en la siguiente tabla.

Etapas admisorias	Etapas de selección	Etapas clasificatorias
<ul style="list-style-type: none"> • Postulación. • Admisión con base en la información documental aportada por los aspirantes. 	(i) Prueba de conocimientos. (ii) Prueba de competencias.	(iii) Hoja de vida (experiencia profesional, formación profesional avanzada y autoría de obras jurídicas). (iv) Entrevista.

II. Agotamiento de la Etapa Admisoria, la Etapa de Selección y la Primera Fase de la Etapa Clasificatoria

- 2.4.** El día 29 de julio de 2019, los Presidentes de las Altas Cortes emitieron los Acuerdos 006 y 007 de 2019, por medio de los cuales publicaron, respectivamente, el listado de los admitidos e inadmitidos al concurso de méritos para la elección del Registrador, motivo por el cual se dio por agotada la etapa admisorias del proceso de selección.
- 2.5.** El día 24 de agosto de 2019, los aspirantes admitidos presentaron las pruebas de conocimientos y competencias, cuyos resultados fueron publicados ese mismo día mediante el Acuerdo 012 de 24 de agosto de 2019. Con este acto se dio por terminada la etapa de selección del procedimiento.
- 2.6.** Los resultados correspondientes a la evaluación de la hoja de vida de los candidatos fueron publicados el día 17 de septiembre, por medio del Acuerdo 015 de 2019. Del mismo modo, en tal fecha fueron publicados los puntajes parciales acumulados por los aspirantes durante la etapa de selección y la primera parte de la etapa clasificatoria, correspondientes al 70% de la evaluación.

En la siguiente tabla se presenta la posición, el nombre y el puntaje obtenido por los diez mejores aspirantes hasta el agotamiento de la primera parte de la etapa clasificatoria:

Posición	Nombre	Puntaje parcial
-----------------	---------------	------------------------

		acumulado
1	Torres Calderón Leonardo Augusto	519,24
2	Almanza Ocampo Virgilio	501,924
3	Vives Pérez Joaquín José	477,7
4	Carrillo Pérez Idarys Yolima	471,47
5	Vega Rocha Alexander	453,423
6	Caballero Díaz Orlando Vidal	452,81
7	Nossa Montoya Gerardo	449,77
8	Rivera Ardila Ricardo	445,32
9	Barreto Suárez Omar Joaquín	441,23
10	Campillo Parra Carlos Enrique	439,48

- 2.7.** Como resultado del proceso descrito, los Presidentes de las Altas Cortes conformaron una lista integrada por los diez aspirantes enunciados en el numeral anterior, los cuales fueron llamados a la Fase de Entrevista tras haber obtenido los mejores puntajes en las etapas y fases anteriores.
- 2.8.** Durante el proceso conducente a la definición de las reglas de juego para la elección del Registrador, y hasta antes de la fase de entrevista, los afectados con las decisiones pudieron interponer los recursos correspondientes y se respetó el principio de transparencia, participación y publicidad, para lo cual las Altas Cortes publicaron en sus respectivas páginas web los acuerdos emitidos en el marco del procedimiento, de tal forma que se respetaron las garantías de acceso a la información y publicidad.
- 2.9.** Así mismo, en desarrollo del examen de conocimientos y de competencias laborales pudieron participar las veedurías ciudadanas y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

III. Fase de entrevista en el marco de la Etapa Clasificatoria

- 2.10.** La prueba de entrevista, correspondiente a la segunda fase de la Etapa Clasificatoria, fue regulada en el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2019, el cual señaló que el fin de la misma consistía en:

“lograr una percepción objetiva sobre las **habilidades directivas** del aspirante”. (Subraya nuestra)

Asimismo, estableció que:

“La entrevista será realizada por los presidentes en forma conjunta a cada uno de los candidatos y tendrá una duración máxima de treinta minutos. **Cada presidente asignará a cada aspirante un puntaje de uno (1) a trescientos 300) puntos, y el resultado final será el promedio de la calificación que señale cada presidente. (...)**”. (Subraya nuestra)

En relación con la expresión “habilidades directivas”, mediante Acta 01-2019 de 18 de junio de 2019, los Presidentes de las Altas Cortes establecieron el perfil gerencial que debía tener el nuevo Registrador Nacional del Estado Civil. Para tal fin, acordaron agregar al perfil previamente existente que el nuevo Registrador debía tener credenciales de honestidad e integridad, así como conocimiento en la “identificación”, el “registro civil” y contratación “de bienes y servicios” con ocasión del proceso electoral”.

Igualmente, en el Acta 01-2019 coincidieron en afirmar que:

“es importante determinar que el elegido tenga el perfil gerencial, de administrador y de líder, lo que sumado a la honestidad e integridad puede garantizar el éxito en el desempeño del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil”.

- 2.11.** El día 8 de octubre de 2019, los Presidentes de las Altas Cortes citaron a entrevista a los diez (10) aspirantes que obtuvieron los mejores puntajes en desarrollo del concurso de méritos para la elección del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. Dichas entrevistas fueron programadas para el día jueves 10 de octubre de 2019, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bogotá D.C., ubicado en la Calle 12 No. 7-65, Piso 3, en la Sala de Gobierno del Consejo de Estado.
- 2.12.** Las entrevistas fueron fijadas para el día 10 de octubre de 2019, a pesar de que días anteriores, varios movimientos estudiantiles habían anunciado la realización de marchas, con el fin de exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos financieros con la educación pública.

Esta noticia fue divulgada a través de diversos medios de amplia difusión nacional, incluidos los enunciados en la tabla presentada a continuación. Por consiguiente, para el día 8 de octubre –fecha de citación a las entrevistas- era previsible que el orden público en el centro de la ciudad se vería afectado como consecuencia de las marchas anunciadas días antes, sin que este hecho fuera considerado por los Presidentes de las Altas Cortes para la fijación de la fecha y lugar de las pruebas.

Medio de comunicación	Fecha	Título de la noticia	Link
La FM	29/09/2019	Estudiantes convocan nueva movilización para el 10 de octubre	https://www.lafm.com.co/educacion/estudiantes-convocan-nueva-movilizacion-para-el-10-de-octubre
El Tiempo	30/09/2019	¿Por qué los estudiantes convocan	https://www.eltiempo.com/vida/educacion/marchas-estudiantiles-el-10-de-octubre-estas-serian-las-razones-418058

		a marchas el 10 de octubre?	
Revista Semana	02/10/2 019	¿Por qué los estudiant es saldrán nuevame nte a las calles el 10 de octubre?	https://www.semana.com/educacion/articulo/por-que-los-estudiantes-saldran-protestaran-el-10-de-octubre/634377
Publimetro	02/10/2 019	Universita rios convocan gran movilizaci ón nacional	https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/10/02/universitarios-gran-movilizacion-nacional.html
RCN Radio	07/10/2 019	Centrales Obreras alistan manifesta ción para el 10 de octubre	https://www.rcnradio.com/economia/centrales-obreras-alistan-manifestacion-para-el-10-de-octubre

- 2.13.** Como consecuencia de las alteraciones de orden público que tuvieron lugar en el centro de la ciudad, el día 10 de octubre, siendo las 10:52 am, el Consejo de Estado anunció a través de sus redes sociales que la entrevista de aspirantes a Registrador Nacional del Estado Civil, se llevaría a cabo en el Centro Social de Oficiales de la Policía (CESPO). Esta publicación fue compartida por la Corte Constitucional a través de la Red Social Twitter.

La anterior comunicación se efectuó a pesar de que (i) ninguna de las dos Corporaciones había empleado sus redes sociales para informar la fecha y hora de la convocatoria inicial, y (ii) sin que fuera emitido un acuerdo formal sobre la variación del lugar, puesto a disposición del público a través de sus respectivas páginas web, el cual correspondía al esquema de publicidad formal adoptado por las Altas Cortes.

De otra parte, no hubo modificaciones en las horas fijadas para la entrevista de cada candidato, por lo cual es válido afirmar que, en estricto sentido, la citación definitiva a las entrevistas sólo fue divulgada al público por un lapso de tres (3) horas y treinta y ocho (38) minutos.



Consejo de Estado
@consejodeestado



Entrevista de aspirantes a Registrador Nacional del Estado Civil, se realizarán en Centro Social de Oficiales de la Policía, CESPO por la situación de movilidad y marchas que llegan al centro de la ciudad.

No.	Apellidos y nombres	Cédula	Hora de la entrevista
1	Torres Calderón Leonardo Augusto	14.268.547	2:30 p.m.
2	Almanza Ocampo Virgilio	79.121.428	2:50 p.m.
3	Vives Pérez Joaquín José	12.556.245	3:10 p.m.
4	Carrillo Pérez Idayris Yolima	40.919.478	3:30 p.m.
5	Vega Rocha Alexander	11.202.241	3:50 p.m.
6	Caballero Díaz Orlando Vidal	8.737.923	4:30 p.m.
7	Nossa Montoya Gerardo	7.523.523	4:50 p.m.
8	Rivera Ardila Ricardo	13.644.442	5:10 p.m.
9	Barreto Suárez Omar Joaquín	79.542.619	5:30 p.m.
10	Campillo Parra Carlos Enrique	9.775.912	5:50 p.m.

17 10:52 - 10 oct. 2019 - Bogotá, D.C., Colombia



- 2.14.** Los Presidentes de las Altas Cortes se abstuvieron de aplazar las entrevistas aun cuando el cronograma del procedimiento de elección se encontraba proyectado hasta el mes de diciembre del año en curso, es decir, no existía un plazo perentorio que obligara a que las entrevistas fueran realizadas ese mismo día, so pena de que se venciera algún término.
- 2.15.** Sumada a la variación del canal de comunicación y el corto lapso de publicación de las citaciones, las entrevistas de los aspirantes adelantadas en el CESPO, se llevaron a cabo bajo una abierta vulneración de los principios de transparencia y publicidad, toda vez que:
- (i) fueron realizadas en un espacio privado y altamente restringido al público,
 - (ii) no se efectuó un registro de las preguntas y de la motivación de las razones de la calificación de los aspirantes,
 - (iii) no se publicaron mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores,
 - (iv) no se contó con la presencia de terceros imparciales que ejercieran control sobre la evaluación y el contenido de las preguntas. En efecto, a diferencia de las demás fases, los Presidentes de las Altas Cortes no realizaron invitaciones a las veedurías ciudadanas, a la PGN, ni a la ciudadanía, medios o público en general, lo cual hubiese podido contribuir a verificar que los entrevistadores fueran objetivos, ecuanímenes y equitativos en sus preguntas; que se llenaran planillas individuales por cada entrevistado; y que se grabaran las preguntas y respuestas para facilitar la evaluación y revisión de las mismas en caso de controversia judicial.
 - (v) no se puso a disposición del público el contenido de las evaluaciones,

- (vi) no se emplearon mecanismos de comunicación instantánea sobre el avance y desarrollo de las entrevistas, y
- (vii) se privó a la sociedad civil de la posibilidad de ejercer control sobre la calidad, pertinencia e idoneidad de las preguntas realizadas a los aspirantes, de tal forma que resulta imposible verificar si las entrevistas cumplieron de manera efectiva con su principal objetivo, esto es, evaluar las aptitudes e idoneidad profesional de los aspirantes.

Dicha transgresión a los principios de publicidad y transparencia constituye una clara violación de la ley y de los acuerdos adoptados por los Presidentes de las Altas Cortes. En particular, tal como se explica más adelante, al realizar las entrevistas de manera privada y sin citación pública, fueron vulnerados el Artículo 2 de la Ley 1134 de 2007 (*“Por la cual se organiza el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución Nacional”*) y el Artículo 27 del Acuerdo 002 de 2019.

- 2.16.** Ahora bien, el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2019 establece que la entrevista de los aspirantes debe ser realizada por los Presidentes de las Altas Cortes en forma conjunta. Sin embargo, de manera expresa señala que **“el resultado final será el promedio de la calificación que señale cada presidente”**.

No obstante, los Presidentes de las Altas Cortes irrespetaron de manera abierta las reglas establecidas para la evaluación de los aspirantes. En efecto, una vez culminadas las entrevistas, los Magistrados dieron una rueda de prensa a la opinión pública⁴, en la cual la Magistrada Lucy Jeanette Bermúdez Bermúdez, Presidente de la Corte Constitucional, explícitamente señaló:

“Entrevistamos a cada uno de los candidatos de los 10 más altos puntajes. Durante 15 minutos conversamos sobre diferentes temas que previamente concertamos para determinar, pues, algunas de las fortalezas de los aspirantes, algunas de las propuestas de ellos, y luego, **de manera consensuada**, otorgamos un puntaje, que como ustedes saben, van entre 1 y 300”. (Subraya nuestra)

Así mismo, la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, Presidente del Consejo de Estado, reafirmó:

“La decisión que adoptamos para hacer la calificación fue en consenso. Hicimos calificación no dividida por magistrado, sino **en consenso**”.

Igualmente, señaló:

“Ha sido un proceso absolutamente transparente, con las reglas de juego absolutamente claras y definidas (...) Para nosotros este diálogo representó un conocimiento directo no solamente de experticia, sino

⁴ Para ver la rueda de prensa completa, consultar <https://www.youtube.com/watch?v=s5axYS1eKSw&feature=youtu.be>

también de habilidades, de aptitudes y capacidades para el desempeño de un empleo público (...)"

Posteriormente, el Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el objeto de evaluación de la entrevista, indicó que:

"Se calificaba la aptitud, la forma en que se presentaban los candidatos, frente a a la institución, a la misión que le corresponde dentro de esa institución, a los proyectos y propuestas que tienen para hacer una buena Registraduría y eso fue lo que se calificó el día de hoy" (...).

Finalmente, en relación con los resultados obtenidos por el señor Alexander Vega, la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado cerró la rueda de prensa en los siguientes términos:

"El Doctor Alexander Vega pues saca el primer puntaje en conocimientos, luego no saca el primer puntaje en hoja de vida, saca un buen puntaje en aptitudes, en competencias, y luego saca un buen puntaje en la entrevista, pero hoy no fue el mejor puntaje. Nosotros lo que hicimos no tenía que ver con los puntajes ya obtenidos, sino que calificamos cada prueba por separado y luego, matemáticamente el computador es quien realiza la operación y sale este resultado. Así es que frente a la operación matemática, pues, podríamos darle completa garantía al país que el proceso ha sido completamente objetivo, transparente, sin injerencia de ninguna naturaleza"

2.17. A pesar de la flagrante violación a los principios de transparencia, publicidad, participación y al modelo de evaluación de la prueba de entrevista, el día 11 de octubre de 2019, fue publicada la lista de elegibles en desarrollo del concurso, cuyos resultados se describen en la siguiente tabla:

Puntaje antes de la entrevista	Posición antes de la entrevista	Nombre	Puntaje de la entrevista	Posición después de la entrevista	Puntaje final acumulado
5	453,423	Vega Rocha Alexander	285	1	783,423
8	445,32	Rivera Ardila Ricardo	290	2	735,32
1	519,24	Torres Calderón Leonardo Augusto	210	3	734,24
3	477,7	Vives Pérez Joaquin José	240	4	717,7
4	471,47	Carrillo Pérez Idarys	240	5	711,47

		Yolima			
2	501,924	Almanza Ocampo Virgilio	180	6	681,924
6	452,81	Caballero Díaz Orlanos Vidal	180	7	632,81
7	449,77	Nossa Montoya Gerardo	180	8	629,77
9	441,23	Barreto Suárez Omar Joaquín	180	9	621,23
10	439,48	Campillo Parra Carlos Enrique	180	10	619,4806

2.18. Los puntajes asignados a la entrevista tuvieron un impacto significativo sobre la puntuación definitiva de cada uno de los concursantes, tal como se evidencia en la tabla presentada en el numeral anterior.

2.19. Así las cosas, durante la Fase de Entrevista llevada a cabo en el marco de la Etapa Clasificatoria se presentaron dos graves violaciones que dan lugar a la declaración de nulidad solicitada a través de este medio de control:

- (i) La violación a los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana reconocidos como principios rectores del proceso de elección en la Constitución Política, la ley y los Acuerdos Reformatorios, como consecuencia de las deficiencias en la citación y la reserva a la cual fue sometido el desarrollo de la entrevista, propiamente dicho.
- (ii) La violación al modelo de evaluación de la entrevista previsto en el Artículo 14 del Acuerdo 004 de 2019, debido a que los Presidentes de las Altas Cortas asignaron a los aspirantes un puntaje “consensuado”, a pesar de que el Acuerdo señala expresamente que el resultado debía ser el resultado final del promedio de la calificación que señale cada presidente.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los hechos expuestos anteriormente, resulta claro que en la Fase de Entrevista del proceso de elección del Registrador, se vulneraron las siguientes normas rectoras: (i) el principio de publicidad, (ii) el principio de participación ciudadana, y (iii) las reglas procedimentales de la evaluación entrevista, cuya violación se explica a continuación.

3.1. Violación al principio de publicidad

Durante la citación y ejecución de la fase de entrevista, se violaron las siguientes normas relativas al principio de publicidad:

3.1.1. Constitución Política de 1991

“**Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y **publicidad**, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. (Subraya nuestra)

3.1.2. Ley 1134 de 2007, por medio de la cual se organiza el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil

“**Artículo 2.** Del organizador del concurso de méritos. El concurso de méritos para la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil será público y lo realizarán los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. (subraya nuestra)

3.1.3. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

“**Artículo 3. (...)**

Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. (...)

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

3.1.4. Acuerdo 002 de 2019

“**Artículo 27. Reuniones.** Los presidentes de las tres (3) corporaciones podrán reunirse válidamente con la asistencia de la mayoría de ellos, salvo en el caso de las reuniones destinadas a las entrevistas y a la elección del Registrados, las

cuales deben contar con la participación de todos. **Las entrevistas son públicas**". (Subrayado y negrilla nuestra)

3.1.5. Reglas jurisprudenciales sobre la prueba de entrevista

La Corte Constitucional, seguida por el Consejo de Estado, han manifestado reiteradamente, a través de su jurisprudencia, que la prueba de entrevista se encuentra conforme a los principios, valores y derechos constitucionales, siempre que su diseño y realización cumpla con los siguientes requisitos:

- i. La realización de la entrevista no puede implicar la consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados para inclinar la balanza del concurso a favor o en contra, según la simpatía o animadversión personal que generen los aspirantes. Ello significa que la prueba no puede tener carácter eliminatorio, sino clasificatorio, es decir, que los resultados de su realización nunca pueden significar la exclusión de un concursante. Esta regla es jurisprudencia.
- ii. Previo a la realización de la entrevista **se deben publicar los parámetros y las condiciones de su realización y evaluación.**
- iii. Las demás pruebas o instrumentos de selección no pueden ser desconocidos a costa de los resultados que arroje la entrevista ni puede la administración sobrevalorar la calificación en ella obtenida distorsionando o desconociendo la relevancia de las demás pruebas. Así las cosas, la entrevista es una prueba accesoria y secundaria.
- iv. No son admisibles preguntas sobre el ámbito personal del aspirante, porque atentan contra derechos como el de la intimidad.
- v. **Los entrevistadores deben dejar constancia por escrito y de manera motivada de las razones de la calificación de un aspirante.**
- vi. Previo a la realización de la entrevista **se deben publicar mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores**, de manera tal que estos no desarrollen de manera arbitraria, subjetiva e imparcial su rol.
- vii. Los nombres de los jurados entrevistadores deberán publicarse varios días antes de la realización de la entrevista y pueden ser recusados si existen razones válidas, objetivas y probadas que pongan en duda su imparcialidad.
- viii.

Concepto de la violación: En un sentido restringido, la Corte Constitucional ha entendido la función pública como "el conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos órganos del Estado"⁵. En virtud de este precepto, los Presidentes de las Altas Cortes tenían el deber de garantizar la publicidad de la totalidad de las actuaciones adelantadas en el marco del procedimiento de elección

⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-563/98. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

del Registrador, de tal forma que fuera posible el ejercicio del control social sobre las mismas.

No obstante, las entrevistas fueron realizadas bajo condiciones contrarias al principio de publicidad, como quiera que:

- (i) Se llevaron a cabo en un espacio privado y altamente restringido al público,
- (ii) No se efectuó un registro de las preguntas y de la motivación de las razones de la calificación de los aspirantes,
- (iii) No se publicaron mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores,
- (iv) No se contó con la presencia de terceros imparciales que ejercieran control sobre la evaluación y el contenido de las preguntas.
- (v) No se puso a disposición del público el contenido de las evaluaciones,
- (vi) No se emplearon mecanismos de comunicación instantánea sobre el avance y desarrollo de las entrevistas, y
- (vii) Se privó a la sociedad civil de la posibilidad de ejercer control sobre la calidad, pertinencia e idoneidad de las preguntas realizadas a los aspirantes, de tal forma que resulta imposible verificar si las entrevistas cumplieron de manera efectiva con su principal objetivo, esto es, evaluar las aptitudes e idoneidad profesional de los aspirantes.

En efecto, los únicos actos llevados a cabo por los Presidentes de las Altas Cortes para dar publicidad a la Fase de Entrevista consistieron en (i) la publicación de la citación, cuya fecha y hora definitivas fueron divulgadas con una anticipación de tres (3) horas y treinta y ocho (38) minutos antes de su realización a través de redes sociales, y (ii) la rueda de prensa que brindaron con posterioridad a las entrevistas, en la cual se refirieron de manera genérica a los aspectos tenidos en cuenta, sin que, hasta la fecha, haya sido publicado el contenido de las preguntas y las respuestas dadas por cada uno de los candidatos.

En consecuencia, también fue vulnerado el contenido del artículo 2 de la Ley 1134 de 2007, el cual consagra de manera explícita que el proceso de elección del Registrador deber ser público, lo cual no ocurrió en la fase de entrevistas. Ahora bien, la Ley en cuestión no es específica en señalar si solo una parte o la totalidad del proceso de concurso debe ser público. Sin embargo, si la misma ley no realiza esa distinción, no le es dable hacerlo al intérprete. De lo contrario, se pondría en riesgo la voluntad del legislador, que de manera intencional se refirió al proceso en su conjunto y no solo a alguna de sus partes.

La Fase de Entrevistas del concurso no se hizo de manera pública, sino de manera hermética frente a la ciudadanía y el país, de tal forma que se violó el precepto legal citado, al igual que la obligación asumida por el Estado para la elección de dignatarios a través de la Declaración de Compromisos por un Estado Abierto de 23 de enero de 2017, firmada por todos los integrantes de la Comisión Nacional de Moralización⁶, declaración que contó con la firma del Presidente del Consejo de Estado (Danilo Rojas Betancourt), el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (Rigoberto Echeverry, actuando en representación del Presidente de la Corte), del propio Presidente del Consejo Nacional

⁶ Regulada por la Ley 1474 de 2011,

Electoral de ese entonces (Alexander Vega), y a la cual adhirió la Corte Constitucional por medio de carta de 30 de mayo de 2018 de su Presidente de ese entonces (Alejandro Linares).

Según el numeral 12 de dicha Declaración de Compromisos por un Estado Abierto, los firmantes se comprometieron a:

“12. Promover la transparencia y participación ciudadana en la elección de las más altas dignidades del Estado.”

Ese compromiso, fue vulnerado por los Presidentes de las Altas Cortes, quienes estaban llamados a garantizar el principio de la publicidad de todas las etapas facilitando, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia.

No podían, por lo tanto, actuar de tal forma que la ciudadanía no tuviera el tiempo necesario para enterarse de las condiciones de realización de las entrevistas las entrevistas. En su lugar, les asistía el deber de llevara a cabo una invitación pública, con anticipacion suficiente y por medio de canales adecuados. Asimismo, ante las fallas en la convocatoria, habría sido conveniente autorizar a los entrevistados a invitar a los medios de comunicación y a las veedurías, con el fin de darle transparencia a la última etapa, particularmente dada su trascendencia en el concurso.

Un ejemplo de transparencia en este tipo de procesos, puede ser el que está realizando precisamente hace algunos meses la Corte Suprema de Justicia para la escogencia de los magistrados llamados a ocupar las vacantes existentes en esa corporación. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, las entrevistas a los candidatos incluso han sido transmitidas por medios televisados y por *streaming*. Nada de eso ocurrió en este caso, incluso cuando el día 10 de octubre, en las horas de la mañana, la Corte Suprema de Justicia adelantó una de dichas sesiones, tal como lo divulgó a través de sus redes sociales.



Portal web que da acceso a transmisión en vivo de entrevistas a candidatos de la Corte Suprema de Justicia (captura de imagen de 11 nov. 2019)

Otro elemento que se suma a esta falta de transparencia, es la inexistencia de una planilla con las preguntas y respuestas que se hicieron a los aspirantes. De tal suerte que ningún colombiano puede saber qué le preguntaron los Presidentes de las Altas Cortes a los candidatos y menos aún qué respondieron éstos últimos.

De otro lado, al haberse abstenido de hacer pública la fase de entrevista, los Presidentes de las Altas Cortes atentaron contra los principios de transparencia y de divulgación

proactiva de la información consagrados en la Ley 1712 de 2014, en virtud de los cuales les asistía la obligación de “publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables de talento humano y recursos físicos y financieros”.

La aplicación de dichos principios resultaba de suma importancia, teniendo en cuenta la relevancia e impacto que tiene para el país el nombramiento del Registrador, sin que sea admisible el argumento de que las condiciones de orden público condujeron a que las entrevistas fueran realizadas bajo la más estricta reserva. En efecto, resulta pertinente destacar que, desde el día 29 de septiembre de 2019, la opinión pública tenía conocimiento de que movimientos estudiantiles marcharían el día 10 de octubre, sin que tal evento hubiese sido tenido en cuenta por los Presidentes de las Altas Cortes para la fijación del lugar de las entrevistas realizada el 8 de octubre, particularmente cuando es de público conocimiento que el centro de Bogotá suele ser el destino final de los estudiantes en actos de dicha naturaleza.

De ese modo, era razonable esperar que los Presidentes de las Altas Cortes consideraran realizar las entrevistas en una fecha o en un lugar distinto a los fijados inicialmente. Sin embargo, al no haberlo hecho y, en su lugar, haber variado el lugar de citación el mismo día de la prueba adoptaron la decisión menos garantista para la realización del principio de publicidad, y para el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos.

En relación con el derecho al acceso a la información pública, la Corte Constitucional ha reconocido que éste cumple tres funciones: (i) garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, (ii) posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, y (iii) actuar como un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal⁷. Por consiguiente, al no haber garantizado el principio de publicidad, también se vio obstaculizado el cumplimiento de tales funciones.

Si bien la ausencia de transparencia de las entrevistas no significa que éstas hayan sido adelantadas irregularmente, lo cierto es que su falta de publicidad (i) transgrede las normas aludidas, (ii) imposibilita el control de su contenido, y en consecuencia, (iii) le resta legitimidad a los resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes de cara a la ciudadanía.

Ahora bien, independientemente de los efectos de la ausencia de publicidad, al haber realizado las entrevistas bajo condiciones de reserva, se vulneró abiertamente, y sin lugar a elucubraciones, la regla establecida en el Acuerdo 002 de 2019 que, señala de manera clara y contundente que “las entrevistas son públicas”.

El Artículo 27 del Acuerdo 002 de 2019 estableció en su inciso segundo de forma incontrovertible y no sujeta a interpretación que “Las entrevistas son públicas”. Pero no lo fueron. Ningún colombiano tuvo acceso a las entrevistas, a las preguntas ni respuestas. Adicionalmente, no se configuró ninguna causal que permitiera someter a reserva las entrevistas. La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado que las actuaciones y la información reservada son excepcionales en la medida que la Constitución y la Jurisprudencia han determinado que las limitaciones que se impongan deben ser ciertas,

proporcionales y razonables precisando de manera clara y concreta el tipo de información cobijada por la reserva, y las razones por las cuales esa reserva deba garantizarse.

Adicionalmente, la reserva de las actuaciones y de la información constituyen una negación del principio de publicidad, e impiden el control ciudadano sobre las actuaciones de los servidores públicos y de las agencias estatales. También resulta contraria a los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte, y que conforman el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. (Art. 93 CP). Dado que se trata de excepciones al principio de publicidad, la posibilidad de establecer una reserva depende no solo de que una ley consagre esta opción de manera general, sino que precise qué información es la que goza de este tratamiento excepcional. Toda limitación de acceso a la información o violatoria del principio constitucional de publicidad (art. 209) desconoce el principio constitucional que informa el ejercicio del poder público, según el cual el legislador puede establecer límites al acceso a la información pública que sean excepcionales, “razonables y ajustadas a un fin constitucionalmente admisible”. La medida exceptiva de la publicidad, igualmente, deberá analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos fundamentales. Considerando que las entrevistas no eran actos ni información sujeta a reserva, ni estaban incluídas dentro del índice de información reservada y clasificada de las altas cortes, es fácil deducir que debían ser públicas por dos razones: primero, porque así lo dispone la ley y la jurisprudencia, y segundo, porque el mismo Inciso 2 del Artículo 21 citado así lo disponía expresamente.

Sumado a lo anterior, las condiciones bajo las cuales fueron adelantadas las entrevistas, también transgredieron las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional ha establecido en relación con las mismas en el marco de concursos de méritos, y las cuales, han sido adoptadas y reiteradas pacíficamente por el Consejo de Estado.

De manera expresa, en Sentencia de 25 de abril de 20198, el Consejo de Estado estudió una demanda de nulidad interpuesta en contra una convocatoria pública adelantada por la Agencia Nacional de Minería. Tal estudio fue realizado a la luz de las reglas jurisprudenciales aplicables a la entrevista establecidas por la Corte Constitucional, de conformidad con las cuales, la prueba de entrevista se aviene a los principios y valores constitucionales, siempre que su diseño y realización cumpla, entre otros, con los siguientes requisitos: (i) Previo a la realización de la entrevista se deben publicar los parámetros y las condiciones de su realización y evaluación, (ii) los entrevistadores deben dejar constancia por escrito y de manera motivada de las razones de la calificación de un aspirante, y (iii) Previo a la realización de la entrevista se deben publicar mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores, de manera tal que estos no desarrollen de manera arbitraria, subjetiva e imparcial su rol.

Sin embargo, es claro que para la realización de las entrevistas:

- No se publicó con la suficiente antelación el lugar definitivo donde se llevarían a cabo las entrevistas.
- No se publicaron los parámetros específicos que se tendrían en cuenta para valorar el perfil gerencial de los aspirantes, así como los relativos a su evaluación.

- No se dejó por escrito y de manera motivada las razones de la calificación de los aspirantes.
- No se publicaron mecanismos idóneos de verificación y control del papel de los entrevistadores, incluida la invitación a terceros imparciales, en contraposición con lo llevado a cabo en las demás fases.

Así las cosas, los Presidentes de las Altas Cortes no sólo transgredieron las normas formales enunciadas anteriormente, sino que, al haber realizado las entrevistas en las condiciones de reserva descritas, transgredieron injustificadamente su propia jurisprudencia, en perjuicio del principio de igualdad, en virtud del cual las reglas que han sido aplicadas a la prueba de entrevista de otros concursos de méritos debieron ser tenidas en cuenta en el proceso de elección del Registrador. Con mayor razón, teniendo en cuenta la dignidad del cargo del que se trataba y el rol que desempeñaban frente al mismo.

Al día de hoy, ningún ciudadano, a excepción de los que realizaron las entrevistas y los que la respondieron, saben qué se les preguntó a los candidatos, ni que respondieron, ni por qué no hay planillas de calificaciones, ni grabaciones, debidamente publicadas, que permitan establecer de manera objetiva la validez de las respuestas dadas por los aspirantes.

No es claro, entonces, que la entrevista por sí misma hubiese sido suficiente para acreditar calidades de líder, gerente público o conecedor de la contratación pública. Así, los Presidentes de las Altas Cortes terminaron lesionando el principio de publicidad que ellos mismos establecieron como principio rector en los Acuerdos Reformatorios.

3.2. Violación al principio de participación ciudadana

Durante la citación y ejecución de la fase de entrevista, se violaron las siguientes normas relativas al principio de participación ciudadana:

3.2.1. Constitución Política de 1991

“Preámbulo. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y **participativo** que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente”. (Subraya nuestra)

“Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, **participativa** y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. (Subraya nuestra)

“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y

deberes consagrados en la Constitución; **facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación**; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Subraya nuestra)

3.2.2. Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se expide la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana

“**Artículo 60.** Control Social a lo Público. El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. (...)”

Artículo 64. Objetivos del Control Social. Son objetivos del control social de la gestión pública y sus resultados:

- a) Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano;
- b) Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia;
- c) Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos;
- d) Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos;
- e) Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales;
- f) Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública;
- g) Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión pública;
- h) Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, y formular propuestas para mejorarla;
- i) Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos y culturales.

Concepto de la violación: La Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, que desarrolló el principio axiológico consagrado en el Preámbulo y en el Artículo 1 de la Constitución Política según el cual Colombia es un Estado Social de Derecho con una democracia participativa, establece que el control social es un derecho y deber de los ciudadanos. Sin embargo, la ausencia de transparencia y publicidad de la Fase de Entrevistas del concurso para la elección del Registrador, hizo imposible el ejercicio de ese derecho y ese deber.

Así, los Presidentes de las Altas Cortes imposibilitaron el control social que se requería como garantía de imparcialidad, neutralidad, independencia, rigor y transparencia en el proceso de selección del Registrador. La ciudadanía colombiana y

las veedurías vieron así mutilado su derecho a observar, vigilar, opinar, recomendar, alertar y denunciar las irregularidades que identificaran en el proceso de selección. Así, más allá de que los Presidentes de las Altas Cortes respetaran las demás reglas de juego prefijadas para la elección del Registrador, ignoraron gravemente el principio constitucional de participación ciudadana, uno de cuyos principales objetivos es que la ciudadanía pueda ejercer el control social.

La elección del Registrador en estas condiciones es un grave mensaje para la democracia colombiana y para la participación ciudadana. En la práctica está abriendo la puerta para que cualquier proceso de selección de un alto dignatario del Estado, que según las normas deba estar caracterizado por su publicidad, transparencia y participación ciudadana, puede ser violado olímpicamente sin ninguna consecuencia.

3.3. *Violación a las reglas procedimentales de la evaluación de la entrevista*

En el marco de la fase de entrevista, se violaron las siguientes normas relativas a la evaluación de las entrevistas realizadas a los aspirantes:

3.3.1. Acuerdo 004 de 2019, por medio del cual se convoca a concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil

“Artículo 14. Los presidentes de las altas cortes realizarán personalmente una entrevista a los aspirantes Con el fin de lograr una percepción objetiva sobre las habilidades directivas del aspirante. El puntaje máximo que puede obtener cada aspirante por este concepto es de trescientos (300) puntos.

La entrevista será realizada por los presidentes en forma conjunta a cada uno de los candidatos y tendrá una duración máxima de treinta minutos. Cada presidente asignará a cada aspirante un puntaje de uno (1) a trescientos (300) puntos, y el resultado final será el promedio de la calificación que señale cada presidente. En esta etapa los organizadores del concurso podrán ser asesorados por un psicólogo.

En el evento en que los aspirantes citados a entrevista no se presenten se le asignará puntaje por este concepto y quedaría excluido automáticamente del concurso. Salvo que el aspirante demuestre la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor que le impida presentarse a la misma, se fijará nueva fecha y hora para su entrevista.

El puntaje obtenido en la entrevista se suma a todos los puntajes anteriores. **Contra los resultados de la entrevista no procede recurso alguno”.** (Subraya nuestra)

Concepto de la violación: Si cada presidente debía asignar un puntaje de 1 a 300 puntos, ello significaría que cada integrante del grupo entrevistador debía actuar de manera independiente y, por tanto, las calificaciones debieron dar puntajes disímiles, debido a la experiencia personal de cada aspirante.

Dicho modelo de evaluación, cobra sentido si tiene en cuenta que su propósito es garantizar la imparcialidad y respetar el criterio de cada uno de los entrevistadores, sin que éstos se vean afectados por la percepción de los demás evaluadores. De esa forma,

el modelo pretende alcanzar el máximo nivel de objetividad posible y a su vez, impedir acuerdos o negociaciones que, voluntaria o involuntariamente, pueden conducir al favorecimiento de un candidato determinado.

No obstante, en clara contravención con lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 y, según lo manifestado en la rueda de prensa que dieron los Presidentes de las Altas Cortes el día 10 de octubre, tras haber finalizado las entrevistas, el puntaje asignado a cada aspirantes fue consensuado, motivo por el cual se violaron las reglas establecidas para la evaluación de las entrevistas.

4. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

En forma respetuosa solicito las siguientes pruebas:

- 4.1.** Se agreguen a la presente demanda las copias originales del acto de nombramiento del Registrador, el Acta 01-2019 y los Acuerdos 001 de 2019, 002 de 2019⁹, 003 de 2019¹⁰ y 004 de 2019.
- 4.2.** Se agreguen las copias de las planillas de preguntas realizadas por los entrevistadores a los entrevistados para “lograr una percepción objetiva sobre las habilidades directivas de cada aspirante” como lo establece el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2019.
- 4.3.** Se agreguen copias de las planillas de calificaciones individuales de cada presidente de alta corte, como lo determina el artículo 14 inciso 2º del acuerdo 04 de 2019.
- 4.4.** Se alleguen copias de las invitaciones que se hicieron a las veedurías ciudadanas y a los sindicatos de la registraduría, a los partidos y movimientos, y demás interesados, para presenciar y escuchar las preguntas y respuestas de los entrevistadores y entrevistados en la Fase de Entrevistas, tal como se hizo en la etapa de selección (la “Etapa de Selección”), regulada por el Artículo 10 del Acuerdo 004 de 2019.
- 4.5.** Se alleguen copias de las actas de las reuniones realizadas por los Presidentes de las Altas Cortes para establecer los puntos que debían modificarse del reglamento para escoger al Registrador Nacional del Estado Civil.
- 4.6.** Se alleguen copias de los acuerdos que se expidieron en las diferentes etapas del proceso para dejar definidas las calificaciones en las etapas cumplidas por los aspirantes a cargo de Registrador Nacional del Estado Civil.

9 De 20 de junio de 2019.

10 De 25 de junio de 2019.

5. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA Y COMPETENCIA.

No hay cuantía en este proceso. La competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia según los Numerales 3, 4 y 5 del Artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6. ANEXOS

- Copia de la demanda para cada uno de los órganos que intervinieron en la elección del Registrador Nacional del Estado Civil.
- Copia de la demanda para la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Acuerdo 002 de 2019, por medio del cual se establece el reglamento del concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil.
- Acta No. 01-2019 RNEC
- Acuerdo 003 de 2019, por medio del cual se corrige el Acuerdo 002 de 2019.
- Acuerdo 004 de 2019, por medio del cual se convoca a concurso de méritos para la elección del Registrado Nacional del Estado Civil.
- Acuerdo 005 de 2019, por medio del cual se corrige el Acuerdo 002 de 2019.
- Acuerdo 24 de 2019, por medio del cual se publica la lista de elegibles en desarrollo del concurso de méritos para designar Registrador Nacional del Estado Civil.
- Acuerdo 25 de 2019, por medio del cual se designa Registrador Nacional del Estado Civil.

Posteriormente, será realizada la publicación exigida por la Ley para el medio de control de nulidad electoral.

7. NOTIFICACIONES

Para efecto de las notificaciones informamos lo siguiente:

DEMANDANTES

Nombre del demandante	Dirección	Correo electrónico
José Roberto Acosta Ramos	Calle 74 No. 3-46	jrobertoacostaopinion@gmail.com
Camilo Alberto Enciso	Calle 71 No. 5-41 Oficina 202	camiloencisov@yahoo.com
León Valencia Agudelo	Calle 26B No. 4A - 45 Piso 15 Edificio KLM	lvalencia@pares.com

DEMANDADOS: Quien profirió el acto administrativo, presidentes de las altas cortes, así:

Corte Constitucional, en Palacio de Justicia. Calle 12 carrera 8, piso X. Bogotá

Corte Suprema de Justicia, en Palacio de Justicia. Calle 12 carrera 8, piso X. Bogotá

Consejo de Estado, en Palacio de Justicia. Calle 12 carrera 8, piso X. Bogotá.

TERCEROS INTERESADOS: Alexander Vega Rocha. Registraduría Nacional de Estado Civil.

Dirección. La registrada dentro del Concurso de la referencia. Bogotá.

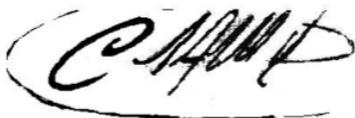
Cordialmente,



JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS

C.C. No 79.487.813

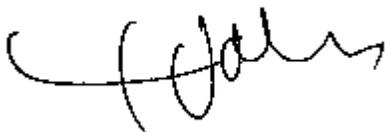
T.P. No. 70.177 del Consejo Superior de la Judicatura,



CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS,

C.C. No. 80.086.658

T.P. No. 152.271 del Consejo Superior de la Judicatura,



LEON VALENCIA AGUDELO

C.C. 71.589.999

8. MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA: SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL

Con fundamento en el artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, solicito la suspensión provisional del Acuerdo 025 de Octubre 13 de 2019 de nombramiento del Señor ALEXANDER VEGA ROCHA como nuevo Registrador Nacional de Estado Civil para el periodo 2019-2023 y la suspensión de cualquier acto de confirmación y posesión que se deriven del proceso impugnado con la presente acción de Nulidad , dada la flagrante violación de las disposiciones invocadas en esta demanda y con el fin de evitar un mayor e irremediable perjuicio y para salvaguardar los derechos colectivos amenazados.

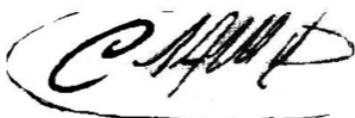
Cordialmente,



JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS

C.C. No 79.487.813

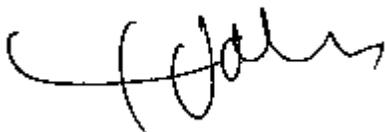
T.P. No. 70.177 del Consejo Superior de la Judicatura,



CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS,

C.C. No. 80.086.658

T.P. No. 152.271 del Consejo Superior de la Judicatura,



LEON VALENCIA AGUDELO

C.C. 71.589.999